

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado primero de Distrito de México por varios Prébiteros, contra la prision á que fueron reducidos por el C. Gobernador del Distrito Federal, y contra el acuerdo del C. Presidente de la República, por el que los mandó expulsar de ella como extranjeros perniciosos.

VARIOS PEDIMENTOS FISCALES.

Primer Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez.

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por los extranjeros Estéban Anticoli, Pablo Greco, Qui- liano Coll, Vicente Mancí, Tomás M. Creally, Ignacio Velasco, Eduardo Sanchez, José María Bordas, Angelo María Vitaliano L- lla, José Amorena y S. Soler, reclamando la resolución del C. Presidente de la Repú- blica, que los manda salir del país, usando de la facultad que le concede el artículo 33 de la Constitución, designando como garan- tías violadas las que otorgan los artículos 13, 14 y 21 de la Constitución. Las ga- rantías que suponen violadas los quejosos, nunca pueden serlo tratándose del uso de la facultad que concede al C. Presidente el artículo 33 constitucional, pues precisamen- te es el caso en que no hay garantías, y no se puede violar lo que no existe. El C. Pre- sidente ejerce esa facultad contra los es- trangeros perniciosos calificándolos por su propio juicio, y sin la concurrencia de nin- guna autoridad ó tribunal; y si la necesita- ra, no le sería exclusiva, como se la da el ar- tículo 33 de Constitución, ni tendría obje- to, pues se le concede por la necesidad que tenía el gobierno de aplicarla algunas veces á los extranjeros de quienes en muchas cir- cunstancias es necesario librarse violenta- mente, por interesarse en ello la paz pública;

TOMO IV.—PARTE II.

y esto no se obtendría sujetándose á las de- moras de un juicio, en que cabría la chican- na á que apelarían los interesados burlando la providencia, pues cuantas ocasiones, la evidencia de un hecho se encuentra fuera de la forma legal. Que la facultad es eco- nómica y no judicial, lo requiere la natura- leza de ella, por no deberse hacer públicas las causales de la expulsión de un estranje- ro, por interesarse la paz de la Nación, pues en muchos casos sobrevendría un conflicto por el enlace que pudieran tener los actos particulares de los súbditos de una Nación con su gobierno, y en la diplomacia, la bu- na armonía de las Naciones descansa en la prudencia y tino de los gobiernos en sus actos.

Los quejosos queriendo eludir la orden de expulsion han pretendido escudarse con las leyes de Reforma, sosteniendo que si eran infractores de la ley de 12 Julio, debió habérseles consignado á la autoridad judi- cial. Fuera de que esa ley impone por cas- tigo el destierro, suponiendo que procediera el juicio, terminado de una manera adver- sa ó favorable ¿se le quitaría al C. Presi- dente la facultad de expulsar al extranjero que hubiera sido juzgado? Evidentemente no. Mas está discusión es inútil cuando la orden de expulsion no descansa en la infrac- cion de la ley de 12 de Julio de 1859, pues terminantemente en la comunicacion de fo- jas 12, el C. Presidente declaró, que la acor- daba usando de la facultad que le concede la Constitución.

Se ha alegado por los quejosos que el Juzgado debió concederles el término de prueba para depurar su conducta; y ¿á qué conducía esto? ¿suponiendo que el Juzgado formara opinion diversa de la del C. Presi- dente respecto á lo pernicioso de un estran- jero, debía prevalecer coartando las faculta- des del C. Presidente y nulificándolas? So- bre esto, el que suscribe, en el juicio de am- paro promovido por D. José María Vilase- ca, asentó lo siguiente: "¿Puede depurarse en el juicio de amparo la conducta del que-

joso? Resultando inmaculado en una prueba legal como hombre privado, basta esto para que el Juzgado revoque un acto del C. Presidente de la República, ejercido en uso de sus facultades constitucionales, constituyéndose en revisor de sus actos? En actos de esta naturaleza, tiene el C. Presidente de la República que asociarse al Juzgado de Distrito cuando en la organizacion de los tres Poderes no forma parte del poder ejecutivo?"

El punto que el Juzgado va á resolver en el presente juicio, es demasiado sencillo, restringiéndose al exámen de si la Constitucion concede al C. Presidente la facultad de expulsar al extranjero pernicioso, y para esto es suficiente la simple lectura del artículo 33 de la Constitucion.

Los quejosos en sus escritos y alegatos se han difundido considerando si la facultad que tiene el C. Presidente de la República de expulsar á los extranjeros perniciosos es tolerable en una república; si esa misma facultad la tienen los gobiernos de otras naciones, y si sea un borron en una constitucion tan liberal como la de 1857; pero todo cuanto pudiera decirse, nada significa existiendo el artículo 33 de la Constitucion, pues no se cuestiona lo que pudiera ser sino lo que es; y fuera de que esa facultad la concedian al Ejecutivo todas nuestras leyes constituyentes anteriores á la Constitucion vigente, y que la tienen los gobiernos de los Estados Unidos del Norte y de Europa, nada implicaria que fuera una novedad en la legislacion, y que el único que la tuviera en el mundo fuera el Presidente de la República Mexicana: procediendo de la Constitucion tenia que acatarse, y su observacion seria obligatoria á los extranjeros que ingresan á la República con el conocimiento de que tienen que sujetarse á la Constitucion y leyes del país.

Por lo expuesto, no existiendo la violacion de las garantías reclamadas, puede el Juzgado declarar, que la Justicia federal no ampara ni protege á los extranjeros Es-

téban Anticoli, Pablo Greco, Quiliano Coll, Vicente Mancí, Tomás Creally, Ignacio Velasco, Eduardo Sanchez, S. Soler, José María Bordas, Angelo María Vitaliano Lilla y José Amorena. México, Julio 19 de 1873.—Herrera Compos.

Es copia que certifico.—F. de A. Osorno.

Segundo pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez.

El Promotor dice: que D. Vicente Mancí, de estado eclesiástico y súbdito Austriaco, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose, de que el día 20 del corriente en la noche fué sacado del colegio Seminario donde se encontraba, y llevado á la cárcel de Ciudad sin haber cometido delito alguno, creyendo que el procedimiento lo motivaba la creencia errónea de que viviera en comunidad. Expone, que vivía en el colegio como catedrático de Matemáticas, autorizado por los artículos cuarto y noveno de la Constitucion, concluyendo con pedir la suspensión del acto reclamado. Pedido el informe de la ley al C. Gobernador, lo ha evacuado manifestando: que teniendo obligación de hacer efectiva la ley de 12 de Julio de 1859, que en sus artículos 13 y 23 castiga con pena corporal á los infractores, había mandado aprehender al quejoso, dando cuenta al Supremo Gobierno para que resolviera lo conveniente. La resolucion dictada por el C. Presidente de la República que ha sido transcrita al Juzgado por el C. Gobernador, en el juicio de amparo de D. José Soler, fué, que usando de las facultades que le dá la Constitucion, salieran expulsados de la República los eclesiásticos aprehendidos. Si esta orden no se hubiera acordado por el C. Presidente de la República, podria ventilarse en el juicio de amparo, la legalidad de los procedimientos del C. Gobernador, supuesto que imponiéndose una pena

por infracción de la ley de 12 de Julio de 1859, cabía el examen de si á la persona que se le imponía la merecía; mas como el punto esta resuelto por la Orden de expulsión dada por el C. Presidente, usando de las facultades que le dá el artículo 33 de la Constitución y ley de 22 de Febrero de 1832, no procede el amparo ni existe violación de garantías constitucionales, por lo que puede el juzgado declarar, que la Justicia federal no ampara ni protege á D. Vicente Mancí.—México, Mayo 29 de 1873.—*Herrera Campos.*

Tercer Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Don José Amorena, de origen Español, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose de que la noche del día 21 del actual, fué extraído por medio de la fuerza armada de la casa anexa al Santuario de los Angeles, violándose en su persona las garantías que concede la Constitución en sus artículos 13, 16, 19 y 21; manifiesta: que se le ha hecho saber que ha sido expulsado fuera del país de Orden del C. Presidente de la República, y alega que esto no puede tener lugar sin oírsele previamente en juicio, concluyendo con pedir se suspenda la orden de expulsión.

El informe del C. Gobernador explica la causa de la aprehensión del quejoso, y la manera como procedió, sin que infringiera ninguna de las garantías reclamadas. Las que supone el quejoso violadas en su persona, nunca pueden serlo tratándose del ejercicio de la facultad que al C. Presidente de la República le concede el artículo 33 de la Constitución, pues precisamente es el caso en que se suspenden, supuesto que el C. Presidente la usa haciendo la calificación por sí, sin la concurrencia de ninguna otra

autoridad ni Tribunal, ni sustanciando un juicio previo, pues puede ejercitarla en los términos que se la concede el artículo constitucional citado y la ley de 22 de Febrero de 1832. La suspensión del acto reclamado no puede tener lugar, porque no cabe el amparo, y cuando lo permite la ley es cuando procede el juicio de amparo, esto es, habiendo materia para sustanciarlo; y no puede existir, en el caso que nos ocupa, tratándose de un extranjero como confiesa serlo el quejoso, que en su ocurno dice que es de origen Español.

Por lo expuesto, puede el Juzgado declarar que no procede el amparo, ni menos la suspensión del acto reclamado.

México, 31 de Mayo de 1873.—*Herrera Campos.*

Cuarto Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Don Eduardo Sanchez, Presbítero y súbdito Español, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose de que el día 21 del actual, encontrándose en el colegio del Padre Fischer dando su cátedra, se le ha presentado un individuo diciéndole que el C. Gobernador deseaba hablarle; que en el acto suspendió su cátedra y en su compañía se vino á la Diputación, y fué conducido al lugar donde estaban reunidos los eclesiásticos aprehendidos. Por la manera como se le redujo á prisión considera violadas en su persona las garantías que concede la Constitución en sus artículos 3, 13 y 16. Pedido el informe de la ley al C. Gobernador lo ha evacuado, manifestando: que el agente de policía llevaba la orden escrita, y que mandó aprehender al quejoso por haber predicado un sermón revolucionario en uno de los templos católicos de la Capital; habiendo dado cuenta de sus procedi-

mientos al Supremo Gobierno para que resolviera lo conveniente.

Resuelta por el C. Presidente de la República la expulsión del quejoso, no hay mérito para el juicio de amparo, pues este aunque podría tener lugar si se tratara de actos exclusivos del C. Gobernador, resuelto el punto por la orden de expulsión, basta que haya sido dada por el C. Presidente de la República, conforme á las facultades que le concede el artículo 33 de la Constitución y ley de 22 de Febrero de 1832, y que el quejoso sea extranjero como lo confiesa en su ocurno.

México, 29 de Mayo de 1873.—*Herrera Campos.*

Quinto Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el Presbítero Don José María Bordas, natural de España, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose, de que viviendo en el colegio Seminario como catedrático de latín y griego, la noche del 20 del mes próximo pasado fué arrancado por la fuerza de su domicilio, y reducido á prision en la Diputación, sin que se le presentara orden escrita de la autoridad en cuya virtud se le imponía. Expone, que vivía en el colegio en unión de los demás catedráticos por razón de su profesión; pero que ni formaban comunidad religiosa, ni llevaban vida común; que si acaso se le aplica la ley de 12 de Julio de 1859, no está comprendido en ella, y que con este procedimiento se han violado las garantías que la Constitución le concede en sus artículos tercero, quinto, noveno y veinte de la Constitución. Agrega, que la ley citada, en algunos puntos es contraria á la Constitución, estando en oposición con sus artículos 18, 21, 23 y 24.

Pedido el informe de la ley al C. Gobernador, no lo evacuó; mas como en el rendido en otros juicios de amparo iniciados por los demas colesiásticos aprehendidos en el mismo colegio, y en el promovido por el quejoso reclamando la orden del C. Presidente de la República que lo mandó expulsar, consta que ha sido dictada, va á tomarla en consideración para fundar la conclusión de este pedimento. De dos actos se ha quejado el Señor Bordas: uno de la prisión y otro de la expulsión; del primero, es público y notorio que ha cesado; y en cuanto al segundo, no existe mérito para el amparo, si el C. Presidente ha obrado con arreglo á la Constitución. Para esto basta la lectura del artículo 33 constitucional que ampliamente concede esta facultad al C. Presidente de la República respecto á los extranjeros, cuya calidad tiene el quejoso que en su ocurno dice que es natural de España.

Podría difundirme mas en este pedimento; mas como este amparo está enlazado al que promovió el quejoso respecto á la orden de expulsión, reproduciendo el que suscribo cuanto allí tiene dicho que pide al Juzgado tenga á la vista, puede declarar que la Justicia Federal no ampara ni protege al Presbítero Español Don José María Bordas.

México, 5 de Junio de 1873.—*Herrera Campos.*

Sesto Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que el presbítero Don Esteban Anticoli natural de Italia, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose, de que viviendo en el colegio Seminario, como catedrático de Teología, la noche del día 20 del mes próximo pasado fué reducido á prision por unos agentes de policía y conducido á la Diputación, segun se le dijo, de orden del C. Go-

bernador, pues no se le presentó la orden escrita que previene la ley; manifiesta, que habitaba en el colegio en compañía de los otros catedráticos, por razón del profesorado, y amparado por el artículo cuarto Constitucional; que si acaso el C. Gobernador procedió en su contra tomando en consideración la ley de 12 de Julio de 1859, no estaba comprendido en ella, ni el expresado C. Gobernador podía imponerle pena alguna sino es violando las garantías que la Constitución le otorga, designando como violadas en su persona las que conceden los artículos cuarto, trece, catorce, diez y nueve y veintiuno de la Constitución. Pedido el informe de la ley al C. Gobernador, no lo evacuó; mas como en el rendido en otros juicios de amparo iniciados por los demás eclesiásticos aprehendidos en el mismo colegio, y en el promovido por el quejoso reclamando la orden del C. Presidente de la República que lo mandó expulsar consta, que ha sido acordada su expulsión, basta la existencia de dicha orden para que no tenga lugar el amparo que se ha promovido.

Dos actos han sido reclamados por el quejoso en la vía de amparo: uno, la prisión, y otro la expulsión; la primera es pública y notorio que ha cesado, y en cuanto á la expulsión, esta la ha acordado el C. Presidente de la República usando de la facultad que le concede el artículo treinta y tres de la Constitución; y aplicada á los extranjeros, es improcedente el recurso de amparo, supuesto que no cabe el examen de si ha sido ó no bien ejercida.

El que suscribe podría difundirse mas en el pedimento; mas como este amparo está enterado con el que promovió el quejoso respecto á la orden de expulsión, reproduciendo cuanto allí tiene dicho, que pide al Juzgado tenga á la vista al pronunciarse su resolución, puede declarar que la Justicia federal no ampara ni protege al Presbítero Italiano D. Esteban Anticoli.

México, Junio 5 de 1873.—*Herrera Campos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Julio 26 de 1873.—Visto el recurso de amparo promovido por los presbíteros D. Esteban Anticoli, D. Tomás Mas, D. Francisco Barragan, D. Vicente Mancí, D. José María Bordas, D. Luis Monaco, D. José Amorena, D. Gabriel Poellen, D. Amadeo Garibaldi, D. Pablo Greco, D. José María Vilaseca, D. Angelo María Vitaliano Lilla, D. Tomás M. Creally, D. Quiliano Coll, D. Eduardo Sanchez, D. José Soler y D. Ignacio Velasco, contra la prisión á que fueron reducidos por el C. Gobernador del Distrito Federal, y con posterioridad tambien contra el acuerdo del C. Presidente de la República, por el que los manda expulsar de ella por extranjeros perniciosos, designando en sus respectivos recursos las garantías que creen violadas en sus personas; los alegatos presentados en su defensa; lo pedido por el representante del Ministerio público y todas las demás constancias de autos á que en lo necesario me refiero, y considerandos.

Primero: que de los informes con justificación dados por el C. Gobernador del Distrito, resulta que las providencias dictadas contra los quejosos, se fundaron en repetidas denuncias sobre infracción de las leyes de reforma, y que el referido funcionario vió confirmadas por haberlas sorprendido infraganti; que los redujo á prisión, porque este delito se castiga con pena corporal, y que dada cuenta con el expediente al primer Magistrado de la Nación, acordó en 23 de Mayo último, que los referidos individuos infractores de las leyes de Reforma y los demás perniciosos, fueran expulsados de la República, usando al efecto de la facultad consignada en el artículo 33 de la Constitución federal; que si en su ejercicio estuviera subordinado á las reglas comunes de enjuiciamiento dejaría de serlo respecto del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y pasaría á la esfera común de todo juicio.

Segundo: que la importancia de este principio se recomienda especialmente al considerar las graves dificultades que en la práctica ofrecería la opinion contraria, si el poder ejecutivo al usar aquella potestad hubiera de sujetarse al orden de procedimientos designado en el artículo 20 del Código fundamental; pero el caso de que hoy se trata es absolutamente diverso, pues está reducido á sí, supuesta la existencia de un delito cuya averiguacion y castigo está consignado á los Tribunales, pueda ejercitarse en las personas responsables de su ejecucion y antes de concluido el proceso la facultad concedida en el artículo 33.

Tercero: que lo practicado por el C. Gobernador del Distrito, en virtud de las denuncias de que habla en sus informes y constan en el expediente remitido al Supremo Gobierno, no tiene otro carácter que el de parte del sumario instruido en averiguacion de un delito que la ley castiga con pena corporal.

Cuarto: que si se califica de indisputable observancia la ley de 12 de Julio de 1859, en cuanto á la clasificacion de los hechos que señala como delitos, y se atiende á su naturaleza para privar al presunto infractor de su libertad individual, justo y lógico es considerarla tambien vigente, á fin de que hecha la consignacion á la autoridad judicial, goce el presunto reo de las garantías otorgadas en la Constitucion; y este concepto se confirma atendiendo á lo dispuesto en la circular expedida por el ministerio de Gobernacion en 12 de Abril de 1858, al prevenir «que aun cuando las autoridades civiles y militares, las legislaturas de los Estados, ó el mismo Congreso de la Union, fuera de los términos Constitucionales expidan órdenes, decretos ó leyes que suspendan las garantías individuales, el poder judicial sin estrépito, sin provocar un antagonismo peligroso entre los poderes públicos, sin hacer declaraciones generales, y limitándose sólo á proteger y amparar al individuo cuyas garantías se atacan, fallará

siempre que la ley Constitucional no puede prevalecer sobre la suprema de la Union, y que ésta en todos casos debe ser obedecida y respetada por todas las autoridades.»

Quinto: que en la comunicacion dirigida al ciudadano gobernador por el ministerio de gobernacion, en 7 de Junio último, y que se transcribió al juez que suscribe en 9 del mismo, se asegura que el ciudadano presidente de la República, aunque no acordó la expulsion fundado en la ley de 59 ya citada, sí le sirvió, para formar juicio respecto de las infracciones cometidas contra las leyes de reforma, el expediente que le remitió aquel funcionario, y en él existen importantes datos que enérgicamente contradicen los quejosos; y por lo mismo, es indispensable esclarecer, pues haciendo efectiva aquella medida se pierden el domicilio, y lo que es mas, el honor que no puede conservar un extranjero que olvidando sus deberes viola las leyes de una nacion amiga, que generosamente le dió hospitalidad, y está obligado á corresponder de una manera digna desde el momento en que pisa su territorio.

Sexto: que si por el tenor literal de los artículos 33 de la Constitucion, 23 de la ley de 24 de Diciembre de 1870, 190 al 193 del Código penal novísimo, pudiendo cuestionarse sobre si el primero es aplicable al presente caso; la duda debe resolverse del modo mas benigno, consultando los principios de equidad natural, que es la regla invariable en materia de interpretacion, y aquellos reprueban la condenacion á una pena sin previa audiencia del que haya que sufrirla.

Sétimo: que resultando de los informes rendidos por el ciudadano gobernador, que los quejosos están en libertad bajo de fianza, y que por lo mismo, si al ordenar su detencion ó al ejecutarla incurrió en responsabilidad, esta no es materia del presente recurso en el punto relativo á la prision, conforme á lo prevenido en el artículo 23 de la ley de 20 de Enero de 1869. Teniendo en consideracion el artículo primero de

la misma, y por los fundamentos de que se ha hecho mérito en la parte expositiva de esta sentencia, debía declarar y declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Presbíteros D. Esteban Anticoli, D. Tomás Mas, D. Francisco Barragan, D. Vicente Mancí, D. José María Bordas, D. Luis Monaco, D. José Amorena, D. Gabriel Toellen, D. Amadeo Garibaldi, D. Pablo Greco, D. José María Vilaseca, D. Angelo María Vitaliano Lilla, D. Tomás M. Creally, D. Quiliano Coll, D. Eduardo Sanchez, D. José Soler é Ignacio Velasco, contra el acuerdo dictado en 23 de Mayo último para que salgan del territorio mexicano, porque al ejecutarlo se les impide el uso de las garantías consignadas en los artículos 20 y 21 de la Constitucion política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo: con arreglo á lo prevenido en el artículo 23 de la citada ley de 20 de Enero, la Justicia de la Union no ampara ni protege á los mencionados Presbíteros, contra la determinacion del ciudadano gobernador del Distrito, en virtud de la cual ordenó su detencion. Hágase saber esta sentencia, de la que se agregará copia certificada por la secretaría á los expedientes respectivos; publíquese en los periódicos Diario Oficial del Supremo Gobierno y Semanario Judicial, y dése cuenta con las actuaciones á la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. El ciudadano juez lo mandó y firmó: Doy fé.—*José A. Bucheli.*—*F. de A. Osorno.*

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno,* secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 19 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta ciudad, por los Presbíteros D. Esteban Anticoli, D. Eduardo Sanchez, D. Pablo Greco, D. Gabriel Toe-

llen, D. Kiliano Coll, D. José Mº Bordas, D. Vicente Mancí, D. Angel Mº Vitaliano Lilla, D. Tomas M. Creally, D. José Amorena y D. Ignacio Velasco, contra el acuerdo del C. Presidente de la República, que los mandó expulsar de ella como extranjeros perniciosos, y con el que estiman vulneradas en sus personas, las garantías consignadas en los artículos 13, 14, 21 y 33 de la Constitucion Federal. Vistos los alegatos presentados en defensa de los quejosos, con todas las demas constancias de autos, y

Considerando, en lo concerniente á la calificacion de absurda, tiránica y bárbara que se ha hecho de la facultad concedida al Gobierno de la República, por el artículo 33 de la Constitucion federal:

Que semejante opinion puede estimarse aventurada, por obstar en su contra el sentido opuesto de personas muy respetables por su liberalismo, ilustracion y rectitud, entre las que se cuentan las que formaron la mayoría del Congreso constituyente que aprobaron el artículo citado.

Que aun estimando como esacta é incuestionable la mencionada calificacion, ella solamente podría tener cabida, ó cuando se debatió el artículo en el Congreso constituyente, ó cuando volviere á debatirse, si llegare á estar á discusion su reforma iniciada ya en el 6º Congreso constitucional, sin que de ninguna manera sea lícito tomarla en cuenta para el presente caso, por ser obligacion estricta de los Tribunales aplicar las leyes vigentes, por duras ó absurdas que se las suponga.

Considerando, en cuanto á la investigacion histórica de los países que han concedido á sus Gobiernos la facultad de expulsar á los extranjeros perniciosos:

Que si se debiera entrar al exámen de este punto, podría citarse la legislacion de muchos pueblos, en que se ha establecido dicha atribucion; pero que tal argumento es tan inconducente como el anterior, porque aun en el supuesto de que el Gobierno de la República Mexicana fuera el único

en el mundo á quien se hubiere dado la referida facultad de expulsion, no por eso dejaría de ser obligatorio para los Tribunales de México aplicar esa prevencion, puesto que deben juzgar, no por lo establecido en otras partes, sino por lo prescrito en la Constitucion de su país, aun cuando fuera singular y anómalo.

Considerando en lo relativo á lo que deba entenderse por la palabra "Gobierno", empleada en el artículo 33 de la Constitucion federal: que si bien en el riguroso tecnicismo constitucional, por Gobierno se entiende el conjunto de los tres poderes supremos; en el uso comun de hablar, así como en el oficial y parlamentario, se da aun que impropiamente el nombre de Gobierno, al Ejecutivo de la Union.

Que para producir el convencimiento de que por Gobierno entiende el artículo 33 de la Constitucion al Presidente de la República, abundan comprobantes de todo género.

Que tal es la inteligencia expresada por los autores de la Constitucion de 1857.

Que la misma es la que le dan los comentadores del texto constitucional.

Que siendo varios los casos en que los Presidentes de la República han usado de la facultad de expulsar, no puede explicarse satisfactoriamente que nunca haya habido un diputado que levante la voz en Congreso alguno para reclamar ó protestar contra un acto con el que deberían estimarse invadidas las atribuciones del Cuerpo Legislativo, demostrando en consecuencia ese silencio, que no ha habido semejante invasion.

Que la Suprema Corte de Justicia á su vez, no ya de una manera tácita, sino expresa y terminantemente ha sancionado en diversas ejecutorias el reconocimiento de la facultad de expulsion ejercida por los Presidentes de la República, lo que de seguro no habia hecho la misma Corte, si hubiera estimado usurpadas sus facultades:

Que á nadie hasta ahora se le habia ocur-

rido poner en duda esa facultad ejercida constantemente á ciencia y paciencia de toda la Nacion por el Presidente de la República.

Que no se concibe, de una manera racional y satisfactoria, como pudiera tener lugar para los casos de expulsion el ayuntamiento de los tres poderes supremos, legislativo, ejecutivo y judicial.

Que segun lo demuestra la historia, en cuantos paises se ha ejercitado la facultad de expulsion, lo ha sido siempre, sin excepcion alguna, por la autoridad encargada del poder Ejecutivo; y que como la razon lo demuestra, á su vez á esa autoridad es á la única á quien puede corresponder, por tratarse de una facultad de seguridad pública y de alta policia, procedente de los datos especiales en que se funda.

Considerando, en lo concerniente á las circunstancias que deban concurrir para que se ejersa la facultad de expulsion.

Que entre las dos consignadas en el artículo 33 de la Constitucion federal, hay una marcada diferencia, pues mientras la de extranjero se refiere á un hecho que admite plena prueba, la de pernicioso atañe á una apreciacion moral, fundada en datos públicos ó reservados.

Que en virtud de esa diferencia tan esencial, no es tan aplicable á una de esas circunstancias lo que sí lo es á la otra.

Que por lo mismo, si el Presidente de la República llegara alguna vez, lo que no es presumible á no ser por equivocacion, á querer expulsar á un mexicano, cabría indudablemente el amparo, porque ya entonces no se obraría con arreglo á la facultad concedida en el artículo 33, sino por el contrario, violandola con una aplicacion indebida, susceptible de prueba intachable; mientras que el amparo no puede tener cabida respecto de la apreciacion moral de ser pernicioso un extranjero, tanto por dejar el artículo 33 esta calificacion al Presidente, puesto que á él es á quien da la facultad de expulsion, cuanto por no ser posible que los tri-

bunales fallen ó decidan sobre apreciaciones morales.

Que pernicioso, segun el diccionario de la lengua castellana, es el gravemente dañoso y perjudicial; y con arreglo á ésta definición la palabra «perniciosos» es mucho mas lata que la palabra «delicuentes» pudiendo, decirse que la primera viene á ser como el genero y la segunda como la especie; y si bien los tribunales pudieran fallar sobre la conducta del dañoso y perjudicial, acusado de algun delito, jamas podian hacerlo sobre la conducta de quien sin estar acusado de delito alguno fuere sin embargo perjudicial y dañoso.

Que al usar el artículo 33 de la palabra mas amplia y genérica, que es la de «pernicioso» y al dejar *salva en todo caso*, la facultad de expulsion, há querido evidentemente que el Presidente quede expedito para expeler al extranjero que estime pernicioso; y que si hubiera de admitirse el absurdo de que se reservase á los tribunales la calificación del o pernicioso, sucederia por necesidad, ó que el fallo fuera absolutorio y entonces ya la expulsion seria obligatoria; resultando en uno y otro caso enteramente negatoria la facultad concedida al Presidente en el artículo 33, á lo cual hay que agregar todavía el que las demoras y dilaciones inevitables en todo juicio, podian hasta poner alguna vez en peligro el órden público, la paz nacional y la seguridad del país, cuando se tratara de expulsiones que debieran ser violentas é inmediatas.

Considerando, por lo que toca al carácter de la facultad consignada en el artículo 33:

Que es en efecto posible ejercerla de una manera arbitraria y abusiva, por ser ilimitada; pero que sin embargo, la experiencia ha acreditado hasta aquí la parsimonia con que la han empleado los Presidentes de la República; y que, sobre todo, aun el caso del abuso podria haber sido motivo para restringir la facultad, sin que por eso lo sea para no respetarla, cuando no quiso admitir restricciones el artículo 33, obligatorio en

TOMO IV.—PARTE II.

los términos amplísimos en que está concedido.

Considerando, en lo que atañe á los artículos del 190 al 192 del Código Penal vigente:

Que por los términos bien sabidos en que fué expedido dicho Código, por ningun motivo pueden ni deben estimarse los arts. citados como ley orgánica del artículo 33 de la Constitución.

Que las disposiciones contenidas en ellos pueden conciliarse con las del artículo constitucional, en el sentido de que los primeros hablan de los casos en que los extranjeros sean juzgados sin anuencia y hasta sin conocimiento del Presidente de la República, á quien se dá el correspondiente aviso despues de la imposición de la pena; y que de no admitirse esta explicación, sino la de que hay un conflicto patente é inconciliable entre los artículos del 190 al 192 del Código penal y el 33 de la Constitución, por haber venido aquellos á restringir la facultad de expulsion que este otorga en todo caso cuando se trate de extranjeros perniciosos, entra entonces de lleno la prevención de que los preceptos de la misma Constitución deben siempre anteponerse y preferirse á los de las leyes secundarias, incluidas aun las orgánicas, desapareciendo en tal virtud los artículos del Código penal ante los del fundamental de la Nación.

Considerando, en lo relativo al artículo 23 de la ley de 12 de Julio de 1859: que ese artículo no habla de los extranjeros; sino de todos los que directa ó indirectamente se opongan ó de cualquiera manera enerven el cumplimiento de lo mandado en la ley citada.

Que el mismo artículo dejó al arbitrio del Gobierno, la expulsion fuera de la República, ó la consignación á la autoridad judicial.

Que no hay en consecuencia, conflicto alguno entre el repetido artículo y el 33 de la Constitución; y que si tal conflicto hubiera, debería siempre prevalecer el artículo constitucional.

Considerando, en lo concerniente al artículo 23 de la ley de 4 de Setiembre de 1870: Que las prevenciones de ese artículo se refieren á consignar la pena que deba imponerse al Ministro de un culto que en el ejercicio de sus funciones ordene la ejecución de un delito ó exhorte á cometerlo, sin que tales disposiciones coartan en lo mas mínimo la amplia facultad de expulsión que el artículo 33 de nuestro Código político otorga al Presidente de la República.

Considerando, en cuanto á la escepcion especial alegada en favor de los CC. Americanos, Vitaliano Lilla y Thomas Mas Crecally y fundada en el artículo 14 del tratado de 5 de Abril de 1831, ratificado en igual día de 1832 y declarado vigente por el de 2 de Febrero de 1848:

Que no es exacta la aseveracion de que por dicho artículo se haya igualado á los americanos con los mexicanos, sin otra escepcion que la de los derechos políticos.

Que si tal aseveracion fuera exacta, los referidos tratados serian inútiles en todo lo que comprenden, bastando y sobrando para cuanto estipulan la simple consignacion de esa amplísima cláusula igualitaria.

Que examinando cuidadosamente el mencionado artículo 14 del tratado de 5 de Abril, se viene en perfecto conocimiento de que solo se refiere á los recursos judiciales, para los que deja abiertos y libres los tribunales de justicia; de manera, que en esta parte sí iguala en efecto á los americanos con los mexicanos; que este concepto se corrobora con observar que ese artículo 14 dice: "que podrán emplear en defensa de sus derechos, los abogados, procuradores, escribanos, agentes y factores que juzguen á proposito en todos sus juicios;" que para acabar de disipar toda duda, agregaré: "que dichos ciudadanos ó sus agentes gozarán en todo, los mismos derechos y privilegios en la prosecucion ó defensa de sus personas ó propiedades, que disfrutaban los ciudadanos del pais *"donde la causa sea seguida;"* y que mediante estas esplicaciones, no hay con-

flicto entre el artículo 14 del tratado de 5 de Abril de 1831, que unicamente concedió á los ciudadanos americanos la igualdad con los mexicanos en cuanto á los recursos judiciales ante los tribunales de justicia, y el artículo 33 de la Constitucion federal de México, que dá al Presidente de la República la facultad de expulsar á los extranjeros perniciosos, sin exclusion de los americanos.

Considerando, en lo que respecta á la sentencia del Juez 1º de Distrito de esta ciudad: Que deduciéndose de las observaciones concernientes al punto sobre la inteligencia que debe darse al artículo 33 de la Constitucion, la legítima consecuencia de que por el se faculta al presidente de la República para expulsar en todo caso, al extranjero que estime pernicioso, la mencionada sentencia que concedió el amparo contra el acuerdo de 23 de Mayo último en que se mandó expulsar á los quejosos, ha sido pronunciada contra ley expresa, con la circunstancia agravante de ser esa ley la primera y mas respetable de todas, la Constitucion del pais. Por tales consideraciones y fundamentos se decreta: "

Primero: Que se revoca la sentencia pronunciada en 26 de Julio próximo pasado por el Juez primero de Distrito de esta Ciudad, concediendo amparo á los quejosos contra el acuerdo del Presidente de la República, de 23 de Mayo último, en que los mandó expulsar.

Segundo: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Esteban Anticoli, D. Eduardo Sanchez, D. Pablo Greco, D. Gabriel Zelen, D. Kiliano Coll, D. José María Bordas, D. Vicente Mancí, D. Angelo María Vitaliano Lilla, D. Thomas Mas Crecally, D. José Amorona y D. Ignacio Velasco, contra el mencionado acuerdo.

Tercero: Que se saque testimonio de lo conducente y se remita al Tribunal de Circuito, para los efectos de la responsabilidad á que se refiere la parte relativa del artículo 15 de la ley de 20 de Enero de 1859.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por todos los votos, menos uno respecto de los dos primeros puntos, y por mayoría respecto del tercero, lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*L. Guzman.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 18 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

JUICIOS DE AMPARO

Promovidos ante el Juzgado 1º de Distrito de México por los Presbíteros D. José Soler, D. Tomás Mas, D. Francisco Barragan, D. Luis Monaco y D. Amadeo Garibaldi, contra la prision á que fueron reducidos por orden del C. Gobernador del Distrito Federal.

VARIOS PEDIMENTOS FISCALES.

Primer Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez.

El Promotor dice: que D. José Soler de origen Español y Sacerdoto Católico, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose de que viviendo

en el Seminario del que es Vice Rector, en ejercicio del derecho que le concede el artículo 4º constitucional, la noche del día 20 del actual fué allanado por la fuerza su domicilio, y encontrándose enfermo, reducido á prision en él, de orden del C. Gobernador.

No habiendo cometido delito alguno que mereciera ese procedimiento, designa como garantías violadas en su persona, las que concede la Constitución en sus artículos 1º, 16 y 18. Pedido el informe de la ley al C. Gobernador, lo ha evacuado manifestando, que el quejoso fué aprehendido como Jesuita y vivir en comunidad; que este hecho es contrario á la ley de 12 de Julio de 1859, y castigandose con pena corporal, ordenó la prision del quejoso, habiendo dado cuenta al C. Presidente de lo ocurrido para que resolviera lo conveniente. Como en el informe consta que el C. Presidente de la República, usando de la facultad que le concede el artículo 33 de la Constitución ha acordado la expulsión del quejoso; el Juzgado puede decretar, que no hay mérito para el amparo, supuesto que no procede cuando tiene lugar respecto de un extranjero, como confiesa serlo el quejoso. Este punto ha sido considerado por el que suscribe en los diversos amparos promovidos por otros Eclesiásticos extranjeros comprendidos en la Orden de expulsion, y reproduce lo que ha dicho en esos pedimentos, que pide al Juzgado tenga á la vista al dictar su resolución. Por lo expuesto, puede el Juzgado declarar: que la Justicia Federal no ampara ni protege á D. José Soler de origen Español.—México, Mayo 31 de 1873 —*Herrera Campos.*

Segundo Pedimento de C. Promotor fiscal.

C. Juez.

El Promotor dice: que D. Tomás Mas se presentó al juzgado interponiendo recur-